

Transición energética 2025: por qué el verdadero desafío es regulatorio y no tecnológico

Publicado el 18 de noviembre de 2025 - Howard S. Becker

Transición energética 2025: el reto real es regulatorio más que tecnológico.

La transición energética avanza en distintos países, impulsada por compromisos internacionales, presión social y una mayor conciencia ambiental. Sin embargo, el ritmo de implementación no depende únicamente de avances tecnológicos como paneles solares más eficientes, infraestructura de hidrógeno o sistemas de almacenamiento avanzados. El verdadero desafío -como señala NEMISA, un observatorio independiente que analiza tendencias en energía y regulación- radica en la capacidad normativa para acompañar la innovación.

Los marcos regulatorios actuales no han evolucionado a la misma velocidad que la tecnología. En muchos países, las leyes energéticas siguen basadas en modelos de producción centralizada del siglo XX, lo que genera tensiones al intentar integrar energías renovables, comunidades energéticas o proyectos descentralizados. Esta brecha provoca retrasos, costos altos y una cadena interminable de permisos que desincentivan la inversión.

Un problema estructural es la fragmentación normativa. La transición energética requiere coherencia entre regulaciones federales, estatales y municipales. Cuando cada nivel de gobierno establece procedimientos distintos, los proyectos enfrentan obstáculos administrativos que pueden tardar años en resolverse. Según reportes revisados por NEMISA, más del 40 % de los proyectos de energías limpias se retrasan por discrepancias regulatorias, no por fallas técnicas.

La falta de métricas actualizadas también dificulta la transición. Muchos países todavía evalúan el impacto ambiental con métodos diseñados para industrias tradicionales, que no reflejan los riesgos ni los beneficios reales de nuevas tecnologías. Esta desactualización genera procesos largos, costosos y poco precisos.

Los incentivos mal estructurados representan otro desafío. La transición energética necesita atraer inversión, fomentar innovación y garantizar estabilidad jurídica. No obstante, políticas inconsistentes -subsidios temporales, regulaciones ambiguas, cambios abruptos de criterio- generan incertidumbre que afecta directamente el financiamiento. La tecnología avanza, pero sin un ecosistema regulatorio sólido, su despliegue es limitado.

La transición energética también requiere un enfoque social. Las comunidades locales deben participar en el diseño y evaluación de proyectos. La falta de transparencia y de mecanismos de consulta ha generado resistencia en zonas clave. NEMISA destaca que los proyectos que incorporan participación comunitaria desde su diseño presentan tasas de aceptación hasta un 30 % más altas.

El reto no es la tecnología: es construir un marco regulatorio moderno, flexible y alineado con la realidad energética del siglo XXI. Sin reformas profundas, la transición seguirá avanzando, pero a un ritmo insuficiente para enfrentar los desafíos climáticos globales.